

	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Auto Interlocutorio No. 450

MEDIO DE CONTROL	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
DEMANDANTE	JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO
DEMANDADOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- DAGMA y PROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S.
RADICADO	76001-33-33-009-2021-00150-00

I. ASUNTO:

El Despacho se pronuncia sobre el medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos (Ley 472 de 1998) promovido por el señor **JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO**.

II.CONSIDERACIONES:

El señor **Juan Martín Bravo Castaño** promueve el medio de control de Protección de los Derechos e Intereses Colectivos contra el **municipio de Santiago de Cali- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA** y la **Promotora Marcas Mall Cali S.A.S.**, con el fin de que se amparen los siguientes: **i)** el goce de un ambiente sano; **ii)** la seguridad y salubridad públicas y; **iii)** la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

En segundo lugar, se advierte que el actor popular solicita acogerse al amparo de pobreza, preceptuado en el artículo 19 de la Ley 472 de 1998.

Frente a este punto, debe decirse que en auto de unificación del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, del primero (1) de octubre de dos mil diecinueve (2019), expediente 20001-33-31-004-2007-00158-01(A)(AP)REV-SU, se dispuso:

“Para el caso de las acciones populares, este beneficio se encuentra previsto en el artículo 19 de ley 472 de 1998, así:

“AMPARO DE POBREZA. El juez podrá conceder el amparo de pobreza cuando fuere pertinente, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, o cuando el Defensor del Pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente.

“PARAGRAFO. El costo de los peritazgos, en los casos de amparo de pobreza, (sic)correrá a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a partir de su creación. Estos costos se reembolsarán al Fondo por el demandado, en el momento de satisfacer la liquidación de costas, siempre y cuando fuere condenado”.

De la norma transcrita, puede inferirse que en el trámite de la acción popular se puede solicitar el amparo de pobreza, solicitud que puede conceder el juez, si lo encuentra pertinente.

Ahora, como la norma trascrita dispone que la solicitud de amparo se sujetará a lo establecido en el C. de P.C., hoy C.G.P., es dable concluir que- el amparo de pobreza, entre otras cosas: i) se concede “... a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia” –artículos 160 C. de P.C. y 151 C.G.P.-,

ii) se puede solicitar antes de la presentación de la demanda –artículos 152 C. de P.C. y 161 C.G.P.-, en la demanda o durante cualquier etapa del proceso¹ y iii) **debe ser pedido expresando bajo la gravedad de juramento la condición de hallarse en incapacidad económica para atender los gastos del proceso**, el solicitante deberá manifestarlo “bajo la gravedad de juramento” –ibídem.

(...)

La parte accionante puede solicitar amparo de pobreza en cualquier estado del proceso, cuando **se cumplan los requisitos sustanciales establecidos en la ley para concederlo** y solo con la finalidad de exonerarse del cumplimiento de cargas procesales futuras por la imposibilidad de sufragarlas”. (Se resalta).

Luego, huelga concluir que en el presente asunto no es procedente conceder el amparo de pobreza solicitado por el actor popular en tanto no cumplió con los requisitos sustanciales establecidos en la ley, entre ellos, no manifestó en la solicitud, **bajo la gravedad de juramento**, que se halle en incapacidad económica para atender los gastos del proceso.

Finalmente, y por reunir los requisitos de forma establecidos en los artículos 18 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho admitirá la presente demanda y dispondrá imprimirle el trámite previsto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 472 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali**,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la demanda promovida por el señor **Juan Martín Bravo Castaño**, contra el **municipio de Santiago de Cali- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA** y la **Promotora Marcas Mall Cali S.A.S.**

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de pobreza presentada por el actor popular, según lo manifestado en las consideraciones de este proveído.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a la parte actora, por Estado (artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 44 de la Ley 472 de 1998).

CUARTO: NOTIFICAR personalmente este proveído mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales en la forma y términos indicados en el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, a:

.- Al señor **Alcalde del municipio de Santiago de Cali** (Art. 159 CPACA), o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones judiciales.

.- Al representante legal de la **Promotora Marcas Mall Cali S.A.S.**

.- Al Agente del **Ministerio Público** delegado ante este Juzgado Administrativo, con el fin de que intervenga como parte pública en defensa de los derechos e intereses colectivos (Art. 21 Ley 472 de 1998, inciso 6o.).

.- A la **Defensoría del Pueblo** – Regional Valle del Cauca, a fin de que si a bien lo tiene, intervenga dentro del presente asunto (Artículo 13 inciso 2 de la Ley 472 de 1998.)

QUINTO: CORRER TRASLADO de la demanda a las entidades accionadas, **municipio de Santiago de Cali- Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- DAGMA**, la **Promotora Marcas Mall Cali S.A.S.**, al **Ministerio Público**, y a la **Defensoría del Pueblo- Regional Valle del Cauca** por el término de diez (10) días siguientes a la notificación y envío de la demanda y sus anexos, para que se hagan parte

¹ Así lo interpretó el Consejo de Estado, entre otros, en auto del 16 de junio de 2005 (expediente 27.432).

en el proceso y para que alleguen pruebas o soliciten su práctica (Art. 22 de la Ley 472 de 1.998).

SEXTO: INFORMAR a los miembros de la comunidad residente en el **municipio de Santiago de Cali**, la iniciación del proceso mediante un **AVISO**. Para tal efecto, el demandante deberá acreditar su publicación en un periódico de amplia circulación con cubrimiento en dicho ente territorial dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído. De la misma forma, se publicará un aviso secretarial sobre la existencia del proceso en el link de la página web de la Rama Judicial, destinado para tal fin.

SÉPTIMO: INFORMAR a la parte demandante y a las entidades demandadas que la decisión sobre la presente acción será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término del traslado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 22 de la Ley 472 de 1998.

XPL

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**MIRFELLY ROCIO VELANDIA BERMEO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 009 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

3b6994f698eb0e3a141c4eb21944aa5c0351326b509f64575f3b3aaa2f1220d0

Documento generado en 26/07/2021 02:19:47 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**